

FUNDACIÓN FELIPE HERRERA LANE

INFORME DE TENDENCIAS

OCTUBRE 2020

El plebiscito del 25 de octubre

Tal como lo anunciaban la mayoría de las encuestas serias en el país, la opción por el apruebo se impuso por una muy amplia mayoría, así como la opción por una convención constituyente íntegramente elegida.

Existe todo un debate acerca del grado de participación ciudadana, que según cifras oficiales alcanza los 7.886.421 sufragios, que corresponde al 50,9 % de los inscritos. La cifra más alta desde que el voto es voluntario. Algunos sostienen que es una participación baja, sin considerar las condiciones sanitarias, el voto voluntario y la pobre campaña a favor de ambas opciones, pero sin lugar a dudas es una participación muy relevante, que impide cualquier cuestionamiento respecto de la legitimidad del proceso constituyente, DE manera concluyente una amplia mayoría ciudadana se pronunció por una nueva Constitución redactada por una convención íntegramente elegida.

La composición del electorado que participó en el plebiscito amerita un análisis en profundidad. La infografía de la votación en la región metropolitana ha llevado a algunos a afirmar que no son los treinta pesos del alza del metro, o los supuestos treinta años de abusos, sino las tres comunas del barrio alto en donde ganó la opción por el rechazo.

Y alguna base de razón pudiera tener esa metáfora. En buena medida, los sectores de mayores ingresos, el 1% de la población (que no tan sólo viven en esas comunas), deben asumir su cuota de responsabilidad por el estallido social que ha vivido nuestro país, defendiendo un modelo de desarrollo que ha favorecido la concentración de la riqueza, defendiendo celosamente sus privilegios no tan sólo en los últimos treinta años sino a lo largo de la historia.

Sin embargo, dos signos muy alentadores marcaron la participación ciudadana el 25 de octubre. Votaron más jóvenes, hasta ahora renuentes a involucrarse en procesos electorales y subió sustantivamente la participación en comunas populares que registraban bajos niveles de participación en contraste con los sectores del barrio alto.

Es de esperar que ello no corresponda exclusivamente a las expectativas generadas por el proceso constituyente sino a una mayor conciencia cívica, pero aún queda pendiente el debate acerca del voto no tan sólo como un derecho sino también como un deber cívico.

Tras los resultados, el gobierno salió a afirmar que no había ganadores o perdedores, que este era un triunfo de la democracia y que se impuso la voluntad de la ciudadanía. Pero aquello es tan sólo parcialmente cierto.

En primer lugar, perdieron los partidarios del rechazo. Perdió Andrés Allamand, autor de la fórmula del rechazo reformista, que aglutinó a la mayoría de la derecha. Perdió la UDI, que institucionalmente se jugó por el rechazo. Perdió el gobierno, que infructuosamente intentó mantener una neutralidad que no logró convencer a nadie y que generó fuerte descontento en la derecha. Perdió Pablo Longueira, que vanamente intentó mimetizarse con el apruebo, buscando evitar una dura derrota para su sector, que tendrá inevitables consecuencias en el terreno electoral.

Nunca la derecha imaginó una derrota tan contundente y categórica como la que sufriera en el plebiscito. Sobre el 30 %, según sus estimaciones, salvaba la cara. El 40 % era casi un sueño. El 21 % obtenido por el rechazo es una verdadera pesadilla que pone en riesgo su representación en la convención constituyente.

La llamada “derecha social”, que liderara Mario Desbordes antes de asumir la cartera de Defensa puede reclamar parte del crédito por haber concurrido al acuerdo del 15 de noviembre y mantener su apoyo a la opción por el apruebo pese a las intensas presiones de los sectores más duros de la derecha, pero hoy corre el serio riesgo de ser subsumida por las demandas de unidad que surgen desde el gobierno y los sectores más duros de la derecha, que hoy buscan cerrar filas para defender todo lo que sea posible de la actual institucionalidad y mantener a la derecha en el poder.

Con tanta o mayor legitimidad los partidos de oposición que impulsaron y posibilitaron el acuerdo del 15 de noviembre, que abriera un cauce político a las demandas de la ciudadanía, pueden reclamar ese crédito, que generosamente puede ser extendido al resto de los partidos de oposición que, si bien no suscribieron el acuerdo, se jugaron por la aprobación del proceso constituyente.

Sin embargo, la imagen de los diversos comandos por el apruebo en la noche del 25 de octubre es lamentable. Mientras miles de manifestantes se reunían en la plaza Italia o de la Dignidad para celebrar el triunfo, los comandos aparecían jugando al “corre el anillo”, esperando visitas de los otros.

¿Una bofetada al sistema político?

Son muchos los sectores que sostienen que todos estos son cálculos menores o irrelevantes. Que todo el mérito es de un amplio movimiento social que “despertó” y decidió rebelarse frente a un injusto orden social, económico y político que la llamada clase política, sin distinción, tan solo contribuyó a mantener y perpetuar.

Incluso algunos sectores sostienen que nada de esto habría sido posible sin el ingrediente de violencia que acompañó el estallido social y la sostenida movilización social y que el resultado es una verdadera “bofetada” al conjunto del sistema político, que debería ceder su protagonismo a la ciudadanía.

La inmensa mayoría del país comprende que no es posible una democracia sin partidos que represente diversos intereses, asuman diversas ideologías y propuestas de futuro, lo que el país espera es que los partidos cumplan adecuadamente esa función de representación. En estrecha relación e interlocución con las organizaciones de la sociedad civil. Escuchando sus demandas y abriendo cauces políticos e institucionales para procesarlas y darles respuestas. Representando legítimos intereses y resolviendo las demandas y conflictos de intereses en base a las reglas de la democracia, teniendo siempre presente el interés superior del país. Más que como una “bofetada” los partidos debieran asumir el resultado del plebiscito como una interpelación y una demanda para renovar la forma de pensar y hacer la política en estrecha relación con la sociedad a la cual se deben.

El tema es más que polémico y se presta para más de un debate. Nadie puede negar que el estallido y la movilización social jugaron roles protagónicos para abrir camino al proceso constituyente y los cambios que ello conlleva. Pero es igualmente preciso reconocer que el acuerdo del 15 de noviembre logró abrir un cauce político para procesar esas demandas y posibilitar el proceso constituyente. Es en este sentido en donde es posible coincidir en que el plebiscito y su resultado es un triunfo de la democracia.

Es bastante más discutible, sin embargo, sostener que la violencia, traducida en la quema de estaciones del metro, saqueos a supermercados, farmacias o pequeños negocios, destrucción de propiedad pública y privada, ataques a recintos policiales y otras formas de violencia, hagan una contribución muy sustantiva para impulsar estos procesos.

La violencia llama a la violencia. Genera dolor y sufrimiento de miles de chilenos que han perdido sus vidas, sus ojos y su libertad. Y desata una represión descontrolada y el uso desmedido de la fuerza por parte de los servicios policiales. Y a menudo conduce a caminos que la inmensa mayoría de los chilenos conoce y no desearía volver a recorrer.

Rechazar la violencia, institucional o contestaría, no implica desactivar la movilización y la legítima protesta social, del todo indispensable para impulsar el proceso de cambios que la

mayoría demanda pero implica marcar claras diferencias y distancia con los sectores violentistas.

Desgraciadamente la violencia ha tendido a naturalizarse en el país y seguramente nos acompañara por largo tiempo. No basta con la represión sino se hace un urgente esfuerzo por reformar los servicios policiales, recuperar parte de su legitimidad perdida por graves violaciones a los derechos humanos y perfeccionar sus procedimientos.

Sectores del Frente Amplio han propuesto una amnistía general para personas detenidas y procesadas por actos de violencia, hechos vandálicos o simplemente delictuales. Es un profundo error y una muy mala señal. Una cosa es solicitar que estos procesos se agilicen, que se discriminen entre aquellos hechos que constituyen faltas al orden o desordenes y otra muy distinta es solicitar una amnistía indiscriminada, que incluye delitos graves en contra de las personas y la propiedad pública o privada, que necesariamente debería incluir a responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Los desafíos del proceso constituyente

El plebiscito y su contundente resultado es el inicio del proceso constituyente. Un proceso desafiante, no exento de riesgos y dificultades.

Con el auspicio del gobierno y el impulso del propio Presidente de la República, la derecha intenta hoy cerrar la brecha abierta en su interior a partir de sus diferencias en torno a las opciones por el apruebo y el rechazo. Piñera ha llamado a la unidad de su sector para enfrentar los desafíos futuros, que incluyen al proceso constituyente y el desafiante cronograma político y electoral que se avecina, llamando a conformar una sola lista de candidatos a la convención constituyente, que vaya desde los republicanos encabezados por José Antonio Kast, hasta el conjunto de Chile Vamos, buscando asegurar al menos un tercio de los convencionales y poner su mirada en el objetivo de proyectar su gobierno a futuro, buscando entregar la banda presidencial a alguien de su propio sector, idealmente a un militante de la UDI, como ha sostenido Sebastián Piñera en un reciente encuentro con dirigentes de Chile Vamos.

El ancho mundo del progresismo, en su más amplia diversidad, asume una enorme responsabilidad frente al proceso constituyente y de cara a los próximos desafíos electorales. Tan solo la unidad en torno a principios y propósitos asegura llevar a buen puerto el proceso constituyente y cumplir las altas expectativas ciudadanas cifradas en este proceso. La división y fragmentación tan sólo puede favorecer a la derecha y amenaza con frustrar esas expectativas.

Los partidos políticos no pueden pretender monopolizar este proceso pero tampoco corresponde estigmatizar a

Personas por el sólo hecho de militar en un partido. La convención constituyente debe intentar representar la amplia diversidad política, social, cultural y étnica del país, sean estos militantes o independientes.

Corresponderá a los líderes sociales y políticos determinar las fórmulas para enfrentar este desafío. Lo ideal sería a través de una sola lista, al igual como pretende la derecha, pero es preciso asumir lo difícil de dicho objetivo dada la diversidad y heterogeneidad del progresismo. La alternativa son dos listas (como máximo), con el riesgo evidente de cristalizar dos bloques irreconciliables para enfrentar los próximos desafíos electorales.

La agenda del día después

El país enfrenta una desafiante agenda política, económica y social, jalonada por un intenso cronograma electoral para renovar a la totalidad de las autoridades de libre elección, incluyendo a los gobernadores regionales e integrantes de la convención constituyente.

Es muy poco lo que se puede esperar de un gobierno prematuramente envejecido, con serias dificultades para asumir la profundidad de la crisis que enfrenta el país, que ha perdido capacidad de diálogo y entra al último año de su mandato sin un verdadero diseño y prioridades claras, como no sea la reactivación de la economía y su obsesión por proyectarse a futuro.

Tal como ocurriera en el debate por el retiro de un 10 % de los ahorros previsionales, nuevamente el gobierno muestra su incapacidad de ordenar a su propia coalición en este nuevo debate por un segundo retiro de fondos previsionales que amenaza con dejar sin ahorros a cerca de cuatro millones de chilenos, y que según las autoridades pone en riesgo la reforma del sistema previsional.

Es más que discutible que esta nueva iniciativa, que parece contar con apoyos transversales en las bancadas del oficialismo y la oposición, constituya una solución para sectores que se han visto más afectados por la crisis social. Y menos que ello contribuya a reactivar la economía, sino de forma muy transitoria y no necesariamente orientada a la subsistencia sino al consumo de artículos suntuarios, como los plasmas, como sucediera en el primer retiro.

Lo verdaderamente relevante es buscar consensos de fondo en torno a la reforma del sistema previsional, en donde el gobierno ha mostrado escasa capacidad de diálogo y búsqueda de acuerdos con la oposición.

De igual manera, el gobierno debiera priorizar una potente agenda social, centrada en la recuperación de los empleos, con un fuerte apoyo a las PYMES, que generan la mayor cantidad de empleos, y medidas de emergencia para ayudar a los sectores más vulnerables fuertemente impactados por la crisis social.

Esta agenda debiera priorizar la urgente reforma del sistema público de salud, avanzar en la reforma educacional, priorizar políticas hacia la infancia y la tercera edad y una política de inclusión de jóvenes que no estudian ni trabajan, para ofrecerles nuevas oportunidades.

Necesariamente la reactivación económica deberá incorporar un fuerte ingrediente social, centrado en el empleo, mayor justicia tributaria y equidad social, que requiere del concurso del sector empresarial y los sectores de mayores ingresos.

En este año decisivo el país enfrenta una disyuntiva muy trascendente de cara al futuro. La restauración del orden actual, con algunas reformas cosméticas que aseguren su sobrevivencia o la instauración de un nuevo orden constitucional y un pacto social que asegure un desarrollo inclusivo, paz y cohesión social.

Eso es lo que verdaderamente se juega en las próximas elecciones. Y las diversas corrientes de opinión deben explicitar sus propuestas de futuro, necesariamente asociadas a liderazgos y candidaturas que las encarnen.